Licencia Mingobierno Nº 03056.
Bogotá (Colombia)
Carrera 13 Nº 24A-10 Of. 402

pstcolombia@yahoo.com
www.pstcolombia.org

Julio de 2013 / precio $1.500

El Socialista

675

PST

PERIÓDICO DEL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES



BRASIL

Primera gran victoria de las movilizaciones

CATATUMBO

ENTRE LA MOVILIZACIÓN Y LA REPRESIÓN

Campaña contra amenazas de muerte

DEFENDAMOS LA VIDA DE LOS DIRIGENTES OBREROS

Negociaciones Santos-FARC

MUCHA TELA DE DONDE CORTAR

WEB



▸ Información internacional

ESPECIAL SIRIA. *Sección Mundo/Asia*

-10 cuestiones fundamentales para entender la Revolución Siria.

-65 años de la Nakba: Haitham, palestino-sirio de Yarmuk, habla en el FSM.

-¡Fuera las bombas sionistas de Siria! Todo el apoyo a la Revolución.



▸ Teoría y programa

TEORÍA MARXISTA

-Crisis del capitalismo y tareas de la revolución en Colombia

-El programa de transición

León Trotsky

-Si Norteamérica se hiciera comunista:

León Trotsky

Las lecciones de la Comuna

León Trotsky

Apoye la construcción del PST

Participación del PST en la manifestación del Primero de Mayo de 2013 en Bogotá.

BONO DE APOYO AL PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES

Mi aporte es de: $5.000 ☐ $10.000 ☐ $20.000 ☐ $50.000 ☐ $100.000 ☐ Otro valor ☐

Nombre .... Correo electrónico ....

Celular .... Responsable .... Pago ☐ Debe ☐

Editorial

LA PAZ Y LA GUERRA

La situación política nacional sigue girando en torno a las negociaciones Santos-FARC. Cada semana una nueva rueda de prensa, una entrevista o una declaración ocupa a la opinión pública y señala los altibajos del proceso. La disputa más reciente se ha dado en torno a la propuesta de las FARC de aplazar las elecciones y la convocatoria de una Asamblea Constituyente para ratificar los posibles acuerdos en La Habana. Santos respondió diciendo que "no pidan cosas imposibles". Y así van las cosas.

Pero mientras nos aturden hablando de paz, el gobierno y los empresarios continúan adelante con su guerra social. El Congreso acaba de aprobarle a Santos el fuero para los militares, con el que garantiza la impunidad en sus acciones represivas, a pesar de la oposición de las organizaciones defensoras de derechos humanos y de quienes esperan algún castigo para los responsables de los "falsos positivos". El carácter del gobierno se ha puesto de presente en la brutal represión a la protesta campesina del Catatumbo.

También fue aprobada la ley estatutaria para el sector salud con la que se garantiza el negocio financiero de las EPS, se imponen restricciones al POS –maniatando a los profesionales de la salud– y se limita la acción de tutela; todo a costa de la salud de los usuarios y las condiciones laborales del sector. La demagogia del control de precios a los medicamentos se aplicará solo a los grandes mayoristas, que se lucran con la escala de sus transacciones; a partir de allí los especuladores determinarán el valor de la receta.

Los conflictos sindicales siguen la misma tónica. A pesar de los condicionamientos que en materia laboral imponen los Tratados de Libre Comercio que ha suscrito Santos, los empresarios siguen atropellando a los trabajadores con el aval del Ministerio del Trabajo. Un ejemplo categórico es la reciente liquidación de Icollantas dejando a casi medio millar de trabajadores sin empleo. Los capitalistas de la transnacional Michelin se dedicarán ahora a importar las llantas. Igualmente continúan las amenazas y asesinatos de dirigentes sindicales y populares.

Por eso, a pesar del deseo manifiesto de millones de trabajadores de que termine el conflicto armado, ninguna ilusión podemos hacernos en que si se firma un acuerdo habrá cambios sustanciales. En la mesa de La Habana se podrán acordar las condiciones de inserción de las FARC a la acción política legal, a cambio de mínimas reformas para modernizar la agroindustria o la ganadería y formalizar la propiedad rural. Mientras tanto los trabajadores y los pobres seguiremos siendo víctimas de la guerra social de Santos, los empresarios nacionales y las transnacionales; por eso necesitamos unificar fuerzas para enfrentarla.

CUT Y FECODE: CENTRALICEMOS LA OPOSICIÓN A LA BUROCRACIA

Frente a la guerra social que adelantan el gobierno y los empresarios contra nuestras conquistas laborales y garantías sindicales y políticas, hoy más que nunca necesitamos organizaciones fuertes, democráticas y dispuestas a la movilización de masas. No contamos con eso. Así se ha evidenciado de nuevo en las recientes elecciones en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE).

Conscientes del escepticismo y malestar de los afiliados con una dirigencia cada vez más alejada de los problemas cotidianos de los trabajadores, se convocaron las elecciones sin realizar primero el Congreso ordinario de la CUT. Éste hubiera permitido motivar de alguna manera la participación de las bases en la elección de delegados, hacer un balance de las luchas de los últimos años y tratar de reorientar la actuación política de la principal central sindical del país, en una coyuntura signada por las negociaciones entre el gobierno y las FARC y el avance de las contrarreformas sociales y políticas de Santos.

Pero en estas elecciones el único propósito de la dirigencia era reciclarse en los Comités Ejecutivos y mantener el control burocrático de las organizaciones, del que derivan privilegios desmedidos, mientras se traicionan las expectativas de las bases. Así se constató en la negociación del pliego único estatal y el pliego de Fecode. Incluso se presentó un grotesco carrusel de dirigentes que se trasladaron de un Comité Ejecutivo al otro, en la medida que la Fecode constituye más de la mitad de los afiliados de la CUT.

Pero el malestar de las bases se hizo sentir. La mitad de los afiliados no acudió a las urnas; y de quienes votaron más del diez por ciento lo hicieron en blanco, anularon el voto, o no lo marcaron. Así, pasivamente unos y activamente otros, le dieron la espalda a quienes pretenden dirigir los destinos de las principales organizaciones sindicales del país los próximos años.

Este campanazo de alerta es un estímulo para quienes presentamos listas de oposición –que obtuvieron también un respaldo significativo– para que redoblemos la lucha por restablecer los principios de la clase obrera como ideario de nuestras organizaciones. Es necesario centralizar una fuerte corriente de luchadores que se ponga al frente de los conflictos en curso. Tarde o temprano lo vientos que hoy hacen ondear las banderas de protesta en Turquía y Brasil llegarán a Colombia y, si es superado el pesado lastre del conflicto armado entre el Estado y la insurgencia, podamos ir al enfrentamiento abierto entre las clases con nuestros propios métodos: la movilización democrática, beligerante y masiva de los trabajadores, los pobres y la juventud.

pst
Partido Socialista de los Trabajadores

Bogotá, julio 5 de 2013

Negociaciones FARC-Santos

¿Cómo conquistar garantías, derechos y libertades democráticas?

En La Habana, en las negociaciones de paz entre el gobierno de Santos y las FARC, se inició la discusión del segundo punto relativo a las garantías y condiciones para el desarrollo de la actividad política legal por parte de las fuerzas de la guerrilla, si un acuerdo exitoso completo concluye en su desmovilización y desarme.



El régimen autoritario colombiano no brinda garantías a la oposición política.

Antes de analizar las propuestas, exigencias o demandas de una parte (las FARC) y las respuestas del gobierno es conveniente ubicar los puntos de referencia de una posición obrera revolucionaria respecto a estos asuntos. Sólo en esa forma será posible delimitarse con plena claridad de las propuestas e iniciativas del gobierno y aclarar la estrategia y objetivos políticos que subyacen en las de las FARC.

El poder político de la burguesía: una dictadura

Aquellos que proclaman que su lucha y objetivos fundamentales son lograr una sociedad, un régimen político o un gobierno más democráticos le hacen el juego a la dominación política e ideológica de la burguesía sobre los explotados y oprimidos, cuando no señalan simultáneamente que una sociedad verdaderamente democrática, un régimen democrático para la enorme mayoría de la población y un gobierno realmente democrático sólo es posible destruyendo el poder político de la burguesía y el imperialismo a través de la toma revolucionaria del poder por las masas obreras, campesinas pobres y trabajadoras en general.

En ningún país existe un régimen o un gobierno democrático, así en abstracto, sin condición de clase específica y definida. Sólo los reformistas empedernidos y la propia burguesía hablan de la democracia en general, para esconder la realidad: que la "democracia" existente en cualquier país en el cual la burguesía detente el poder económico sobre los medios de producción, y en consecuencia ejerza el poder político a través de cualquier clase de régimen o gobierno, no es más que una feroz dictadura, una dictadura de clase, la dictadura de la burguesía, los terratenientes y el imperialismo (una minoría) sobre la inmensa mayoría de la población (la clase obrera y el conjunto de los trabajadores, el campesinado pobre, las minorías étnicas y todos los explotados y oprimidos).


Ivan Marquez, negociador de las FARC.



Distintas maneras, un solo objetivo

No siempre la burguesía y el imperialismo gobiernan en la misma forma en cada país. Si las condiciones lo exigen pueden implantar una feroz dictadura militar, con decenas, centenares o miles de muertos, desaparecidos y prisioneros. Otras veces se ven obligados a compartir el gobierno con partidos u organizaciones que se reclaman de la clase obrera o dicen defender los intereses de los explotados. Esos son los famosos frentes populares, política preconizada durante décadas por los partidos comunistas buscando gobernar en común con un sector "progresista" de la burguesía.

Los diferentes regímenes políticos, los distintos gobiernos que pueden existir bajo el mismo régimen político, reflejan en últimas la correlación de fuerzas (quien está a la ofensiva, quién a la defensiva) que en cada momento existe al interior de la sociedad burguesa en cada país entre las clases fundamentales: el conjunto de la burguesía imperialista y nacional y el conjunto de la clase obrera, los trabajadores y los miles de explotados y oprimidos.

Pero en unos y otros, bajo los regímenes fascistas, las dictaduras militares, los gobiernos "democráticos" elegidos popularmente con sus estructuras parlamentarias o los gobiernos de frente popular el objetivo de la burguesía es el mismo: mantener el dominio político que le garantiza la propiedad privada sobre los medios de producción y por lo tanto su condición de clase dominante en la sociedad.

Por lo anterior, nunca, en ninguna circunstancia, un gobierno en el cual participe la burguesía –lo cual supone que dicho gobierno respeta lo más sagrado para el burgués: la propiedad privada sobre los medios de producción– podrá ser considerado por una posición obrera revolucionaria como "su" gobierno, ni llamar a apoyarlo o respaldarlo.

Cuando una fracción burguesa reaccionaria o contrarrevolucionaria llama a derrocar a un gobierno "democrático" (Kornilov contra Kerensky en las jornadas de julio de 1917 en Rusia) la posición obrera revolucionara llamará a derrotar con la lucha y la movilización a la fracción burguesa reaccionaria –oponiéndose a ella incluso con las armas– sin depositar ninguna confianza o respaldo en el gobierno "democrático" que continuará siendo un gobierno burgués al cual hay que derrotar (revolución de octubre contra el gobierno de Kerensky).

Con el ejemplo anterior se muestra, en el caso extremo, que la clase obrera y una posición revolucionaria no es indiferente ni ajena a qué clase de régimen o gobierno existe en cada momento. Las tácticas y programas para combatir a cada uno de ellos deberán ser diferentes pero el objetivo será el mismo: buscar derrotarlo con la lucha y la movilización organizada de los trabajadores, explotados y oprimidos; conquistando el poder político y conformando un gobierno obrero y popular, realmente democrático, que inicie las transformaciones económicas necesarias e imprescindibles (expropiación de los grandes medios de producción y muchas otras) para democratizar realmente el conjunto de la vida social. En ese marco se ubicará la garantía de ese gobierno de amplios derechos de organización y expresión política a todos aquellos que no atenten directamente contra el nuevo orden social que se empieza a construir.

¡Por garantías, derechos y libertades democráticas!

Todo el marco estratégico y programático anterior, opuesto por el vértice al programa y estrategia de los reformistas que adoran de rodillas la "democracia" (burguesa) y sus regímenes y gobiernos

Continúa en la página 4



Mientras el gobierno habla de paz reprime la protesta.

Viene de la página 3.

"democráticos", permite ubicar con claridad la lucha más consecuente por conquistar garantías, derechos y libertades democráticas bajo cualquier régimen o gobierno de la burguesía.

No luchar por garantías, derechos y libertades democráticas bajo cualquier régimen o gobierno burgués sería el más craso extremoizquierdismo, igual o peor de dañino para el avance de la conciencia obrera revolucionaria que el cretinismo parlamentario de los reformistas.

Se cae de su peso que a la clase obrera, a los explotados y oprimidos, les conviene echar abajo a una dictadura militar cuando ella existe, producto de una derrota contrarrevolucionaria anterior. Echarla abajo significará que la correlación de fuerzas entre las clases ha comenzado a variar favorablemente al proceso revolucionario.

Igualmente, luchamos por las libertades y defendemos los derechos y garantías democráticas en la medida en que la existencia de ellas brinda condiciones más favorables para la organización, movilización y desarrollo de la conciencia de millones de trabajadores. Pero el avance de la conciencia se logra siempre y cuando un partido revolucionario explique constante y permanente que el objetivo a lograr cuando se lucha por un derecho democrático trasciende el marco de la actual sociedad, régimen y gobiernos burgueses, así aparezcan ellos como los más "democráticos". Que por lo tanto la garantía, derecho o libertad democrática debe ser asumida como una herramienta o instrumento para continuar avanzando en la lucha y no como un objetivo en sí mismo. Que sólo tomando el poder político y conformando un gobierno obrero y popular que comience a colocar los medios de producción al servicio de toda la sociedad podrá hablarse realmente del inicio de la construcción de una sociedad, un régimen y un gobierno democrático.

Arturo Zuluaga G.

Segundo punto del temario de las negociaciones en La Habana

¡Mucha tela de donde cortar!

Al extensísimo pliego de propuestas presentado por la delegación de las FARC sobre el punto de las garantías para la participación política, cuya discusión se inició hace dos semanas, se le podrían agregar muchísimas más. Sin exagerar ni ironizar, nos atrevemos a decir que en este terreno, desde su punto de vista, las FARC se quedaron cortas aunque su propuesta haya sido cuestionada por proponer rehacer el conjunto de la estructura estatal, del régimen, del gobierno y de las condiciones para la actividad política.

Una democracia a sangre y fuego

Si bien durante décadas ha sido denominada como una "democracia", la estructura política del Estado, del régimen y el accionar de todos los gobiernos de los últimos 60 años –por fijar un límite– merecen un calificativo bien diferente. Podría denominársele "democracia de los asesinos", "democracia de los hampones y rufianes", o simplemente "democracia burguesa a sangre y fuego" en una definición de clase más precisa.

Porque sangre es lo que le ha costado a los trabajadores y a los explotados en general el ejercicio del poder político realizado por la burguesía del país en estas décadas. Y fuego, físico fuego (denominado popularmente plomo) es con lo que la burguesía, los terratenientes y las multinacionales –que sostienen y han garantizado los diversos gobiernos– han respondido ante las exigencias obreras y populares por mejoras en sus condiciones de existencia. Como lo acaban de comprobar los campesinos del Catatumbo.

En gran medida han sido estas condiciones excepcionales de represión, recorte de libertades democráticas, persecución, amenazas y asesinato de los opositores lo que dio pie para que sectores radicalizados del campo y la ciudad considerasen –equivocadamente– que el único camino para enfrentar y transformar tal situación era alzarse en armas contra el estado, lanzándose a la lucha guerrillera.

¿Apostando fuerte para ganar poco?

Pareciera que la táctica de las FARC en las negociaciones es la del jugador que apuesta fuerte así sepa que ganará bien poco. Ubicados en el campo de forcejear reformas y algunas garantías democráticas, los resultados del primer punto, relativos al problema de la tierra, así parecen indicarlo. El balance que hace el propio Andrés París, vocero de las FARC, es elocuente: *"...La reforma agraria, si se quiere, beneficia más a las fuerzas del capitalismo, que requiere modernizar más el campo, adecuarlo a los desarrollos generales del país capitalista..."**

**(http://unionpatrioticadecolombia.org /2013/06/17/van-a-crear-un-partido-o-tomaran-la-plataforma-de-la-union-patriotica/, tal como aparecía el 20/6/2013).*

En el terreno de las propuestas de derechos y garantías para la participación política es posible que suceda algo similar. Que luego de muchas idas y venidas, vueltas y revueltas, el asunto termine con algunos ajustes que no modificarán sustancialmente las condiciones bajo las cuales la burguesía ejerce su poder político. Es posible incluso que tales reformas, ajustes o garantías hagan aparecer al régimen como más "democrático"; confundiendo en esa forma a quienes toman como referencia la "democracia" en general sin entender que mientras la burguesía mantenga el poder político se tratará de la democracia burguesa, que es dictadura de clase contra los trabajadores y los pobres. Pero apariencia no es realidad.

Como antecedente no lejano tenemos la Constitución de 1991. Con la firma incluso del Partido Comunista, con participación de exguerrilleros que levantaban banderas "democráticas" similares a las que actualmente levantan las FARC, ¿qué cambios sustanciales desde el punto de vista de los derechos y garantías para la actividad política asegura? ¡Ninguno sustancial! ¡Durante lo que va de su existencia en el país se perpetraron y se siguen perpetrando masacres, desplazamientos, amenazas y asesinatos en forma generalizada contra todo opositor político o luchador social!.

Muchos de los gestores y defensores de la Constitución del 91 se lamentan ahora señalando que el problema son las decenas de reformas a que ha sido sometida y que su espíritu no ha sido aplicado. ¡Cuál espíritu! La Constitución en un estado burgués es un pedazo de papel con el cual la burguesía en el poder hace lo que le da la gana. Como detalle, que no como añoranza, en algunos aspectos electorales era incluso más democrático el régimen anterior a 1991. Bastaban tres ciudadanos para presentar legalmente un candidato a la presidencia y que éste fuese reconocido como tal por el Estado.

¡No es tan mamey!

El asunto no está entonces tan sencillo para los acuerdos en el segundo punto del temario. No es imposible que se produzcan cambios o modificaciones (incluso sustanciales) en un régimen político sin un proceso revolucionario que derrote el anterior régimen. Pero es claro que sin un cambio en la correlación de fuerzas entre las clases tales cambios o no son sustanciales o son bastante efímeros o reversibles y terminan siendo asimilados y aprovechados por la propia burguesía para perfeccionar sus mecanismos de dominación y control político.

La apertura, vía una negociación, a que fuerzas guerrilleras desmovilizadas dispongan de una expresión parlamentaria legal, por ejemplo, rápidamente puede convertirse en un factor adverso para la lucha obrera y popular. En general, por su carácter de clase y por su estrategia programática y política tales fuerzas terminan convertidas en agentes administradores del Estado burgués a nivel municipal, departamental o nacional. Esa experiencia ya está suficientemente hecha en el país.

Bernardo Yepes G.

Catatumbo

Desde el pasado 11 de junio, más de 10 mil campesinos del Catatumbo, en el nororiente colombiano, se han movilizado por la suspensión de la erradicación de cultivos de coca, la constitución de las zonas de reserva campesina y el respeto a los derechos humanos en la región.

Entre la movilización y la represión



Protestas campesinas en el Catatumbo.

Lo que se expresa en el conflicto del Catatumbo y la fuerte represión estatal que ha dejado varios campesinos asesinados y numerosos heridos es la apuesta del Gobierno de Santos de 'consolidar' áreas estratégicas para las llamadas locomotoras minero-energética y del agro, con más de 12 mil hectáreas de cultivo de palma y cacao y con intereses de explotación carbonífera en los territorios de la etnia barí.

Esta región transfronteriza entre Colombia y Venezuela, atravesada por el Río Catatumbo y por el oleoducto Caño Limón - Coveñas, ha sido azotada por el conflicto armado desde hace cuarenta años, fue allí donde las AUC y el Ejército asesinaron a medio centenar de campesinos en la Masacre de la Gabarra en 1996 y donde se han asentado frentes de las FARC, el ELN y el EPL.

Exigencias de los campesinos

Las organizaciones sociales y políticas del Catatumbo han levantado tres exigencias:

1. Suspensión de la erradicación manual de cultivos ilícitos que realizan contratistas bajo el mando de las Fuerzas Militares y un programa de subsidios para que las familias campesinas hagan la sustitución de cultivos.

2. Establecimiento de zonas de reserva campesina en la región con el fin de favorecer a las familias campesinas e impedir que la zona se convierta en un latifundio de las locomotoras del agro, para la producción de palma y cacao.

3. Garantizar el respeto a los derechos humanos, en esta región fue donde se perpetraron los "falsos positivos" de pobladores de Soacha por parte del Batallón Santander del Ejército de Colombia y donde militares y policías mantienen el control de una población, que ha tenido más de 40 masacres desde el año 2000, según ACNUR.

Varias de estas reivindicaciones han sido tratadas en la Mesa de Interlocución entre las Organizaciones Sociales y el Gobierno que se estableció en 2009, cuyo funcionamiento no ha garantizado la solución a los problemas de la población.

En el actual conflicto, el Gobierno ha anunciado los inicios de unos diálogos con la participación del General Rodolfo Tamayo del Ejército y del General Rodolfo Palomino de la Policía, a lo que las organizaciones del Catatumbo se han negado, pues según las leyes colombianas las Fuerzas Militares no son deliberantes y porque además estas instituciones son las responsables de los asesinatos y las mutilaciones que se han producido en este conflicto.

Solidaridad con el Catatumbo

El conflicto en el Catatumbo se genera en medio de las negociaciones del Gobierno y las FARC en La Habana, cuando se ha llegado al primer punto de acuerdo en la agenda. Es comprensible que la influencia social que tiene la insurgencia en esta región esté participando en estas movilizaciones pero las masivas protestas muestran el cansancio de la población de los abusos de las Fuerzas Militares y del conflicto que genera la implementación de las locomotoras minero-energéticas y del agro, que amenazan con arrasar al campesinado de la región a favor de las empresas que explotarán el carbón y los cultivos de palma y cacao.

Es necesario que las centrales obreras y las organizaciones sociales y políticas respaldemos la lucha de los campesinos del Catatumbo, entendiendo que el conflicto social no se negocia y que sólo a través de la movilización y la unificación de las luchas se pueden obtener las reivindicaciones, como lo muestra la reciente lucha de los trabajadores y estudiantes en Brasil y Turquía.

Alonso C. H.

Fuero militar: licencia para matar

Uno de los avances del gobierno de Santos en el ajuste de las instituciones ha sido la aprobación del fuero militar en el Congreso de la República. No es cualquier cosa. El objetivo de esa ley es garantizarle a las fuerzas armadas una justicia propia, que le permita actuar con impunidad.

En Colombia, durante la pasada década los militares ganaron cada vez más peso político en el régimen. Se triplicó el número de integrantes de las fuerzas armadas y su sostenimiento es una carga creciente en el presupuesto nacional. En ese sentido su papel es un factor fundamental en las actuales negociaciones de paz.

Un ejemplo de ello fue la exigencia del gobierno de que dos generales participaran en la mesa de negociación con los campesinos sublevados del Catatumbo, y el rechazo de estos a tal condicionamiento expresa el profundo resentimiento que sienten hacia las fuerzas armadas. Es en esa zona donde se ejecutaron de manera perversa los llamados "falsos positivos", el asesinato despiadado de jóvenes inermes, reclutados en Soacha, a cambio de las recompensas que ofrecía el gobierno para forzar resultados en la lucha contra la insurgencia. Hoy la suerte de esas investigaciones sigue en vilo.

Pero no sólo es el ejército el que actúa con impunidad. La policía hace lo propio, como lo acaba de demostrar con la muerte de cuatro campesinos y más de treinta heridos durante los operativos represivos contra



la protesta en Catatumbo. Un hecho que en cualquier país hubiera provocado un levantamiento popular en Colombia es una rutina.

Esa "licencia para matar" con la que cuentan las fuerzas armadas también está en cuestión en el caso del asesinato del joven grafitero bogotano a manos de un policía, la alteración de la escena del crimen y la complicidad de los superiores jerárquicos con el patrullero responsable. Hoy se encuentran amenazados desde los padres del joven hasta la abogada y el fiscal vinculados al caso.

Esa es la justicia que nos espera al amparo de lo que podemos llamar el generalizado "desafuero militar".

Armando Barrera

Una contra-reforma agraria

La ley y la la trampa

Desde hace unas semanas –a partir de la denuncia que hiciera el congresista Wilson Arias– se dio a conocer cómo los grandes empresarios de los agronegocios se apropiaron de manera irregular de tierras en el Departamento de Vichada. Estas empresas incumplieron la disposición del Artículo 72 de la Ley 160 de 1994, según la cual no se puede concentrar bajo una misma persona más de una Unidad Agrícola Familiar en tierras que han sido objeto de proceso de reforma agraria.



Tierras del Ingenio Riopaila en el departamento del Valle.

Es muy importante anotar que los empresarios contrataron los servicios jurídicos de la Firma Brigard & Urrutia –cuyo accionista era Carlos Urrutia, Embajador de Colombia en Estados Unidos– y en particular el abogado Francisco Uribe Noguera, quien de acuerdo con las informaciones de prensa fue el asesor jurídico de Río Paila, Monica Semillas y Forest First.

La ley y la trampa

Las compras de los predios las realizan en una misma notaría (16 del círculo notarial de Bogotá); y las compras se realizan 2 meses, un mes o incluso una semana después de constituirse la empresa ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

La gran mayoría de los predios tiene en su tradición, en la anotación número 1, que fueron dados a beneficiarios en procesos de reforma agraria en el período 1991-1998. Es decir, tienen antecedente de baldío. Son predios vecinos, como lo confirman las referencias a límites en los certificados de tradición y libertad.

Estos predios se venden a empresas cuyos certificados de existencia y representación de la Cámara de Comercio reportan un mismo domicilio en la ciudad de Bogotá; comparten una misma actividad económica; tienen un único miembro de junta directiva; tienen un único representante legal principal; una misma revisoría fiscal y se constituyen en un lapso de seis meses. Cada una de estas empresas compra un predio, que por sus antecedentes de reforma agraria corresponden a una UAF.

Casos Río Paila, Cargill y Forest First

En estos casos, con algunas diferencias, la estrategia de concentración ha sido la misma.

El recorrido de Riopaila Castilla fue el siguiente: La firma Brigard & Urrutia constituyó 27 SAS y cada una de estas empresas compró una UAF con recursos prestados por Riopaila Castilla. El abogado Uribe Noguera cedió la propiedad a firmas europeas con domicilio en Luxemburgo y posteriormente Riopaila Castilla compró las tierras.

En el caso de Cargill –empresa agroexporadora más grande del mundo con presencia en 66 países– su fondo de cobertura Black River Asset Management ha creado diversas empresas para llevar a cabo su actividad económica en Colombia. Las firmas fundadas con capital estadounidense, tienen naturaleza jurídica variable. Esta empresa adquirió tierras en Vichada, que ascienden a 90 mil hectáreas, con una inversión superior a los $ 73.000 millones, para lo cual fueron creadas 39 empresas SAS.

Forest First Colombia SAS, también denominada como Forestal de la Orinoquía, es una empresa constituida en julio de 2010 con un capital autorizado de 200 mil millones de pesos. Esta empresa, a diferencia de Cargill, no adquirió los predios por medio de distintas empresas para evadir las restricciones en materia de acumulación de predios con antecedentes de reforma agraria, sino que adquirió dos predios, consolidando una extensión que claramente supera la UAF promedio de la región.

Una contra-reforma agraria

Los empresarios de los agronegocios, con el aval de los dos últimos gobiernos, incumplen la disposición del artículo 72 de la Ley 160 de 1994, según la cual no se puede concentrar bajo una misma persona más de una UAF en tierras que han sido objeto de proceso de reforma agraria. Incluso, el ex Ministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo presentó un proyecto de ley para establecer la prohibición de concentrar estos predios desde 1994 y no desde 1961.

Ante esta situación, que el actual Ministro de Agricultura reconoce como irregular, el Presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Rafael Mejía, ha manifestado que "esta discusión no debe alejar la inversión del país" y ha pedido al Gobierno que "defina su política agrícola de Estado, que nos diga cuál será, si quiere un país de minifundios o uno en el que quepan los medianos y grandes con enfoque de agricultura empresarial para generar empleo".

Y el caso de acaparamiento de tierras no termina en estos casos, según la revista *Semana*, "varios de los empresarios más importantes de Colombia han hecho grandes inversiones en Vichada y en la altillanura. Cada uno tiene una modalidad de negocio diferente y las inversiones sumadas superan los 1.000 millones de dólares". Señala la publicación a Luis Carlos Sarmiento (16.600 hectáreas y una inversión de 100 millones de dólares, 12.000 hectáreas de palma y 4.600 hectáreas de caucho entre Puerto López y Puerto Gaitán, el cultivo de caucho más grande en América Latina), Alejandro Santo Domingo (alquila 4.000 hectáreas a Riopaila en el Vichada), Familia Eder (a través del Ingenio Manuelita tienen 20.000 hectáreas en el Meta) y La Fazenda (del grupo empresarial Aliar que ha invertido más de 100 millones de dólares y hoy cuentan con 13.000 hectáreas sembradas de maíz y soya en Puerto Gaitán).

De esta manera, lo que podemos ver es que empresarios y gobierno –bajo la orientación de la forma de abogados del actual Embajador de Colombia en Estados Unidos –gestaron una estrategia jurídica para convertir la reforma agraria en una contra– reforma que terminó concentrando en grandes terratenientes la tierra destinada a los campesinos.

Cecilia Caicedo

Campaña contra amenazas de muerte

Defendamos la vida de los dirigentes obreros

Colombia ocupa el deshonroso primer lugar en la violencia antisindical del mundo. Desde 1986, año en que se creó la CUT, han sido asesinados 2.942 dirigentes sindicales. En 2012, en plena implementación de los acuerdos suscritos con los Estados Unidos para la aprobación del TLC, fueron asesinados 20 sindicalistas, 90 desplazados forzadamente, 20 detenidos y 5 fueron desaparecidos. Ya en 2013 cinco han sido asesinados.



Wilson Castro en marcha de protesta.

En lo que va corrido del gobierno de Juan Manuel Santos las amenazas ya bordean las 1.000. A pesar de que durante 2013 la violencia antisindical ha aumentado y la impunidad supera el 95%, Colombia salió de la "lista negra" de la OIT por violación de los derechos laborales.

El enfrentamiento de Uribe y Santos se refleja también en el aumento de los ataques contra los dirigentes sindicales. Mientras el gobierno intenta demostrar que este gobierno enfrenta decididamente a la ultraderecha y promete la acción implacable de las fuerzas armadas y la justicia contra las "bandas criminales" (a las que llaman "la mano negra"), nada parece frenar la violencia, los crímenes se siguen cometiendo, mientras las denuncias y las investigaciones pasean por todas las oficinas de las entidades encargadas de velar por la seguridad de los amenazados. Mientras tanto la patronal aprovecha para debilitar la resistencia de los trabajadores.

Solo algunos casos reciben atención del gobierno como los del periodista de la *Revista Semana*, Ricardo Calderón, quien inmediatamente ocurrió su atentado, se le garantizaron los medios para su protección; o en el caso de Julio Roberto Gómez, presidente de la CGT que consiguió hasta las declaraciones del mismo presidente Santos.

El uso del terror, método estructural del régimen político colombiano

Los asesinatos, las desapariciones forzadas y las amenazas, han servido al empresariado en Colombia para mantener sus niveles de ganancia, y han sido efectivos para desarticular y debilitar la resistencia a las medidas antiobreras. Si bien el uso de la violencia contra el movimiento obrero se acostumbra cuando es necesario para garantizar sus intereses, la dimensión alcanzada en Colombia le otorga una particularidad al régimen político que la hace estructural.

Durante décadas la burguesía ha argumentado que quienes defienden los derechos de los trabajadores son "guerrilleros vestidos de civil", lo que en un país con una confrontación armada de más de cinco décadas, ha garantizado la impunidad para los criminales, y se ha naturalizado la violencia antisindical, neutralizando a los trabajadores frente a las agresiones contra sus dirigentes.

A los patronos les resulta más barato pagar un escuadrón de sicarios que les "resuelvan el problema" que atender las exigencias de mejorar los salarios y las condiciones laborales. Además políticamente les da más réditos porque aterrorizan a los trabajadores para evitar que se organicen. Esa lógica perversa no ha encontrado, por parte de la mayoría de la dirigencia sindical, una voluntad de confrontarla. Las huelgas y los paros realizados por los trabajadores cementeros y los maestros, en respuesta a la violencia contra los trabajadores no encontró la solidaridad de clase suficiente que hubiera permitido frenar el desangre. Los asesinatos no fueron enfrentados llamando a la movilización y a los paros de producción. El método de la clase obrera fue reemplazado por sólo denuncias, trámites jurídicos, "lobby" parlamentario, "acciones urgentes", viajes internacionales, y proyectos de cooperación internacional con ONG y organizaciones de derechos humanos.

Recuperar el método obrero para enfrentar las amenazas

Por todo eso, aunque hablar de paros de producción y de mecanismos de autodefensa de los mismos trabajadores parezca algo muy difícil de concretar, es una tarea de fundamental importancia para la preparación de la resistencia, y luchar por superar el profundo retroceso en la conciencia democrática de la clase trabajadora. Eso significa continuar el proceso de concientización de la base de las organizaciones y de sus familias. Debemos asumir la discusión, y proponer estas medidas en las reuniones de organismos directivos de los sindicatos, y llevarla al seno de las asambleas de los trabajadores. Empezar a coordinar acciones de solidaridad entre aquellos que están directamente afectados, y que han vivido en carne propia la inacción del estado y la falta de solidaridad de las burocracias sindicales. Ese es el objetivo central de la realización de un Encuentro nacional de dirigentes sindicales y sociales amenazados que se ha venido impulsando.

Elizabeta Volok

Exigimos a la Coca Cola el traslado del compañero Wilson Castro

Wilson Castro es directivo de Sinaltrainal Bolívar, y trabajador de la multinacional norteamericana Coca Cola desde hace más de treinta años. Por su compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores ha sido amenazado de muerte en múltiples ocasiones, y el pasado 13 de abril fue víctima de un atentado en su residencia, que de no haber sido por la solidaridad de los vecinos, seguramente le hubiera costado ser la víctima número nueve de los trabajadores de Coca Cola asesinados.

La gravedad de la situación le valió que el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) del gobierno, calificara su nivel de riesgo como extraordinario. La ONG norteamericana Wola que hace seguimiento a los compromisos del gobierno colombiano para la implementación del TLC, en su carta pública del 3 de junio, solicita al Ministro del Trabajo, Rafael Pardo, su inmediata intervención para garantizar la integridad física y la vida de Wilson Castro junto a la de otros sindicalistas de la ciudad de Cartagena también militantes del PST.

A pesar de dos solicitudes radicadas a la empresa solicitando el traslado de Wilson Castro, Coca Cola no ha dado respuesta, por lo que se inició una campaña que incluye el envío de misivas apoyando la solicitud, entre las que se encuentran pronunciamientos de los parlamentarios del PDA Iván Cepeda, Wilson Arias y Alexander López, del Bloque por Asturies, de los sindicatos LAB y Co.bas del Estado Español, y de varias organizaciones sindicales de Colombia.

Trabajadores de Seatech en Cartagena

Por estabilidad laboral

El Socialista entrevistó a Fredys Marrugo, Presidente de la Unión Sindical de Trabajadores de la Industria Alimenticia (USTRIAL), sobre la actual situación de los trabajadores en la empresa Seatech de Cartagena. El compañero Marrugo encabezó la lista que promovió el Partido Socialista de los Trabajadores al Comité Ejecutivo de la CUT. Esta lista obtuvo un importante respaldo en la base trabajadora, a pesar de las condiciones adversas en que se adelantó la campaña, por las amenazas y atentados contra varios dirigentes sindicales de Cartagena.



Protesta de los trabajadores de Seatech, organizados en Ustrial, en la vía Mamonal.

El Socialista: ¿Cómo son las condiciones laborales en Seatech?

Fredys Marrugo: La lucha que estamos desarrollando los trabajadores que laboramos para la empresa Seatech International Inc, no solo ha sido heroica, sino que ha sido un ejemplo para todo el movimiento obrero colombiano. Lo primero es que en la empresa que produce el atún Van Camp's, laboramos más de 2.000 trabajadores, de los cuales solo 50 laboran con contrato a término indefinido con la empresa. El resto están suministrados o son temporales, contratados por las empresas Atiempo Servicios Ltda., Servicios Empresariales y Recursos Especiales. Más del 50% son mujeres madres cabeza de hogar y un gran porcentaje padecen enfermedades profesionales.

E.S. ¿Qué ha hecho el sindicato?

F.M. USTRIAL va a cumplir tres años de fundada el 7 de agosto, y estos tres años han sido de una lucha permanente, principalmente contra el patrón que considera que los trabajadores somos desechables, es decir que los trabajadores suministrados no tienen derecho a nada, y como organización sindical le hemos demostrado no solo a los patrones, sino a muchos que se consideran sindicalistas, que solo la lucha permanente en la única forma que tenemos los trabajadores para hacerlos respetar.

Después de más de 29 meses, logramos que el Ministerio del Trabajo obligara a las empresas Seatech, Atiempo y Recursos a sentarse a negociar el pliego de peticiones que les presentamos el 31 de enero de 2011. En esta lucha tuvimos que enfrentar a la anterior directora del Ministerio del Trabajo, que en últimas era la jefe de recursos humanos de toda la patronal cartagenera, e iniciamos conversaciones a finales del mes de junio. Además hemos logrado que a Seatech se le imponga una sanción por 500 millones de pesos por intermediación laboral, lo que obliga a la empresa a contratar en forma directa a la gran mayoría de los trabajadores.

E.S. ¿Cuáles son los puntos más importantes del pliego?

F.M. Estamos exigiendo que a la mayoría de los trabajadores se les reconozca la antigüedad en la empresa y sean contratados en forma indefinida con Seatech, que sean reintegrados más de 130 trabajadores que fueron despedidos por afiliarse a USTRIAL, que existan programas de salud ocupacional que eviten que tantas compañeras terminen con enfermedades profesionales, entre otros.

E.S. ¿Cómo ha respondido la empresa en la mesa de negociaciones?

F.M. Lo primero es que Seatech dice que no puede contratar a todos los trabajadores y que si es así, ellos cierran la empresa. Lo único que puede explicar esta actitud arrogante de la empresa es que con las empresas temporales y los administradores de la empresa debe existir un negocio oscuro, pues está demostrado que es más económico para la empresa contratar directamente a los trabajadores. Nosotros les estamos diciendo a los trabajadores que deben pronunciarse sobre la negociación y los estamos invitando a que en la consulta que debe convocar el sindicato y el Ministerio del Trabajo, votemos la huelga, como la única herramienta que tenemos para hacer retroceder a esta patronal reaccionaria.

E.S. ¿Tú fuiste candidato al Comité Ejecutivo de la CUT, cuál es tu balance?

Con un grupo de trabajadores y el PST acepté encabezar la lista al CE de la CUT, porque ninguna de las listas era realmente clasista. Como alternativa propusimos una plataforma de lucha en defensa de los trabajadores. No pude hacer una campaña nacional porque, como a cualquier obrero, me tocó realizar mis turnos de trabajo. Esa es una de las razones por las que los obreros industriales tenemos una escasa representación en la dirección de nuestra central. Pero, además, es una desgracia todas las aberraciones que se presentaron en este proceso. Entre otras cosas, nosotros como sindicato solicitamos la afiliación a la CUT hace tres años y les entregamos esta solicitud a Tarsicio Mora y a Domingo Tovar. Bueno, después de todo este tiempo nos dijeron que no podíamos votar porque no estábamos afiliados a la CUT. Así podríamos seguir denunciado y llenar páginas y páginas de anomalías en este proceso. Podríamos decir que la burocracia sindical habla de democracia solo cuando a ella le favorece, y no puede ser así, los trabajadores debemos hacer respetar la democracia en nuestras organizaciones.

Despido masivo de trabajadores en la mina La Francia

El Consorcio Minero del Cesar (CMC), en la Mina la Francia de Becerril, que contaba con 450 trabajadores directos y 150 trabajadores indirectos, está haciendo despidos de trabajadores en forma masiva mediante la figura de retiro voluntario, presionando con la parálisis de la producción y la falta de pago de salarios. El argumento es la existencia de un conflicto con la empresa Colombian Natural Resourses (CNR). CMC se encarga de explotar la mina, mientras que la CNR hace la comercialización. El conflicto comenz el 21 de enero cuando salieron a flote diferencias entre estas dos empresas relacionadas con problemas del contrato, perjudicando a los trabajadores. Mientras la empresa se declara en estado insostenible, los trabajadores no reciben salario desde el 22 de marzo, fecha en que la mina paralizó actividades. Esta situación se hace más complicada para cerca de 80 trabajadores que han contraído enfermedades profesionales.

Los trabajadores exigen: reconocimiento de los derechos laborales convencionales, pago de salarios, pago de horas extras, reconocimiento de las enfermedades profesionales adquiridas en la empresa y que CMC pase a asumir las obligaciones con los trabajadores por sustitución patronal. Los trabajadores necesitan la solidaridad de los demás sindicatos, tanto económica como de presión, frente a la patronal y al Ministerio de Trabajo.



Reforma Pensional en Colombia

¿Copiando el modelo español?

La reforma pensional española no sólo aumentó la edad de pensión y las cotizaciones sino que disminuyó la mesada de los ya pensionados y les impuso un gravamen del que antes estaban exentos. Es el mismo modelo que presentó el gobierno de Santos al Congreso de Colombia el pasado mes de marzo.



Con la reforma pensional se aumenta la cotización al tiempo que se rebajan la mesada.

Para conocer lo que nos espera veamos sólo dos aspectos de la reforma española que empezó a regir a partir de 2013: retrasa progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años y aumenta de 15 a 25 años el periodo para calcular las pensiones correspondientes, proceso que se implementará en el 2022.

Los capitalistas españoles han hecho bien la tarea impuesta por el FMI y el gobierno alemán con el pretexto de superar la actual crisis. En Colombia en cambio la tarea se empezó hace 20 años y los españoles vienen ahora para mostrarnos que se puede ir más lejos.

Colombia está a la vanguardia en materia de recortes pensionales

Los recortes pensionales en Colombia empezaron a ser implementados con la ley 100 de 1993, veinte años después el número de trabajadores con este derecho es una pequeña minoría, el objetivo de cobijar a un mayor número de trabajadores no se logró y por el contrario el modelo impuesto hace que los jóvenes vean la pensión como un derecho que solo alcanzarán los abuelos.

El panorama para los trabajadores colombianos en materia de pensiones ha venido empeorando, pero aún las reformas han respetado los derechos adquiridos de los pensionados. La ley 100 de 1993 mantuvo un régimen de transición y no tocó a los pensionados, excepto la reforma de Uribe que desmejoró aún más las condiciones quitando la mesada 14 y limitando el régimen de transición, pero siguió sin tocar el derecho adquirido de los pensionados.

Con el sofisma de buscar aumentar la cobertura, dar mayor equidad y hacer sostenible el sistema futuro –según lo señala el ministro de trabajo Rafael Pardo– habrá que trabajar más años y cotizar más tiempo, para cobrar una pensión que será inferior a las que se han cobrado hasta ahora para iguales ingresos y cotizaciones.

Los trabajadores deberíamos ser conscientes que toda reforma propuesta por los gobiernos capitalistas al régimen de pensiones trae como consecuencia inexorable la disminución de la mesada pensional a cambio de mayores cotizaciones en tiempo y dinero.

Los Fondos Privados: el ahorro de los trabajadores al servicio del capital financiero

Puesta en vigencia la ley 100 de 1993 que dio paso al nacimiento de los Fondos privados de pensiones, se desató un campaña sin precedentes mostrando las bondades de acogerse al régimen privado y por supuesto desacreditando el régimen de prima media que hasta la fecha había estado en manos del Seguro Social, entidad estatal.

Veinte años después, muchos de los trabajadores que cambiaron de régimen, abandonando lo público, perdieron el régimen de transición y hoy cuando van a reclamar su pensión reciben porcentajes muchísimo menores que si hubiesen permanecido en el ISS.

El régimen de transición termina en el 2014 o sea que en el 2015 se empiezan a pensionar con ley 100 quienes permanecen en el régimen de prima media que maneja hoy Colpensiones en reemplazo del ISS, Cajanal y demás Cajas de prestaciones de carácter público. Los trabajadores empezaran a ver con más claridad lo nefasto de la ley 100 no sólo porque las mujeres se pensionarán con 2 años más y los hombres con 7, sino que recibirán mesadas muchísimo menores.

Con el régimen anterior y para quienes mantuvieron el régimen de transición la mesada corresponde al 75% del promedio de los devengado en el último, con 1.000 semanas cotizadas. La mesada aumenta 5% por cada año adicional cotizado hasta alcanzar un máximo de 90%.

A partir de 2015, los trabajadores tienen que cotizar como mínimo 1.300 semanas para alcanzar un 65% del promedio de lo devengado en los últimos 10 años. Aumentando 2 puntos por año adicional cotizado puede alcanzar un máximo de 75%.

La verdad sobre los Fondos Privados

Recientemente el Ministro de Trabajo Rafael pardo, manifestó sin sonrojarse, que pensionarse en Colombia era un privilegio que sólo alcanzaba 1 de cada 5 trabajadores. Las razones: la mayoría no alcanza a percibir un salario mínimo, la informalidad en el empleo y el derrumbe de la base que sostenía el modelo de prima media.

Y es que el sistema de pensiones funcionaba como una pirámide, la base que eran los trabajadores jóvenes cotizaba para pagar la pensión de los más viejos. Pero con la ley 100 se derrumbó la pirámide porque la gran mayoría, engañada por la campaña ideológica, terminó confiada en las bondades del mercado y prefirió pasarse a los Fondos privados de pensiones.

¿Pero con cuánto y a qué edad se pensiona un trabajador con estos Fondos?

Los trabajadores recién empiezan a conocer la verdad sobre estos fondos, donde juega la rentabilidad, el valor del dólar, de los TES y otros factores ajenos a los trabajadores y sus necesidades. Les dicen a los trabajadores que van a reclamar su pensión o que quiere saber con cuanto se pensionara, que en primer lugar la pensión le cubre algunos años, si vive más de estos queda desprotegido, sin pensión o en consecuencia tendrá que conformarse con un monto que en la mayoría de los casos alcanza uno o dos salarios mínimos.

También tiene la opción de reclamar el total de lo ahorrado, obviamente primero se hacen los descuentos de administración, costos del retiro y recibe el total ahorrado con una mínima rentabilidad, la ganancia real quedó para el Fondo o más exactamente para los dueños, un puñado de banqueros acostumbrados a millonarias ganancias.

Sin embargo el monto ahorrado y la rentabilidad no están garantizados: según el comportamiento del mercado, puede al final recibir incluso menos del total ahorrado.

En conclusión la fórmula impuesta primero en Colombia y luego en España y otros países en crisis, que han destinado millonarias sumas a salvar los bancos, no tienen diferencia sino en la oportunidad con que se impone. Los artífices son los mismos: organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial u otros, todos ellos dedicados a proteger el gran capital, son creados por el imperialismo y están a su servicio.

La reforma a la salud

Del derecho a no tener derechos y de las mentiras de Santos

Cómo habíamos anunciado en ediciones anteriores en el Congreso de la República ha sido aprobada la reforma a la salud que presentó el gobierno y, con el embeleco de que se acabará con las EPS y se mejorará el servicio, se da paso a un verdadero reencauche de la ley 100.



La reforma de Santos, profundizará la crisis de la salud.

Mucho se ha dicho sobre la reforma, en los últimos días la contralora general Sandra Morelli ha mostrado su disgusto porque sus apreciaciones no fueron escuchadas, apreciaciones que hacen referencia nada más ni nada menos que a la sostenibilidad fiscal del sistema. Quiere decir que con los cambios que se hace persisten las "fugas" de capitales del sistema y pronto estaremos de nuevo ante una crisis presupuestal. Si bien no lo plantea directamente la contralora, es evidente que las crisis fiscales de la salud no son accidentales sino estructurales y esta situación no mejorará mientras persista el modelo mercantilista, que se calcula da dividendos a las EPS por más de 6 billones de pesos anuales.

Otro de los grandes vacíos de la reforma es que sigue considerando el derecho a la salud como adscrito a los entes territoriales. Eso no cambió con la reforma, quiere decir que si una persona tiene el seguro en Cali y se va a vivir o a pasar un tiempo a Neiva no tendrá derecho sino a la atención de urgencias y eso con varias limitaciones. Pero no estamos hablando de colombianos paseadores sino de cerca de cuatro millones de desplazados, además de la población que migra con los cultivos. ¿Qué ventaja puede tener una ley que de plano excluye la condición de cuatro millones de personas?



Por otro lado como ya se había anunciado es una mentira que se acabará con las EPS. Únicamente cambian de nombre para llamarse gestoras lo que les permitirá sanear finanzas y reciclar el negocio, los planes de beneficios están muy lejos de cubrir las necesidades de la población y las gestoras seguirán actuando como peaje para evitar que las personas accedan a ellos como lo han actualmente las EPS.

Toda la reforma es un engaño, todo tiene su revés por ejemplo:

-Derecho fundamental... sujeto a estabilidad fiscal y tutela limitada

-Derecho a escoger la IPS (Hospital o médico)... sujeto a disponibilidad

-Derecho a ser tratado en otra ciudad... sin derecho a los pasajes ni a alimentación

-Derecho a todos los servicios... que no estén en la lista de exclusiones

-Se acaban las EPS... llegan las Gestoras

-Se acaba el POS... Se llamará Mi Plan

-Control de precios de medicamentos... pero solo al mayorista o sea que al consumidor final le pueden seguir cobrando lo que quieran

Y así sigue la lista de gazapos intencionales de esta penosa reforma. Por otro lado se contempla y se fomenta la adquisición de pólizas de aseguramiento privadas al mejor estilo norteamericano, uno de los sistemas de salud más excluyentes y costosos del mundo, en lugar de pensar en un auxilio para las personas que no tienen, se piensa en pólizas de todos los precios y se contempla que si se comprueba la capacidad de pago el usuario deberá de algún modo subvencionar sus gastos.

Se favorece la corrupción a todos los niveles, por ejemplo se faculta a los gobernadores para que elijan los gerentes de los hospitales públicos, es decir, sus cuotas políticas, más clientelismo y malas gestiones.

De manera engañosa se mezclan dos proyectos: uno, el de ley estatutaria que pretende elevar la salud a la categoría de derecho, sujeto a disponibilidad fiscal, que aunque ya pasó por el Congreso debe ser aprobada por la Corte Constitucional y sanción presidencial, y el segundo, la ley ordinaria donde se contemplan planes de beneficios, administradoras y demás con el objetivo de cercenar el supuesto derecho adquirido en la primera.

Se vanaglorian con artículos que supuestamente protegen a mujeres, niños, ancianos y desplazados, pero estos artículos hace rato que existen sin que nada se cumpla.

Ninguna reforma proveniente del gobierno Santos será beneficiosa para la población, buscan beneficiar a los grandes empresarios, sanear sus propias finanzas e institucionalizar la exclusión, dando unos planes de beneficios mínimos y fomentando el aseguramiento privado para las clases medias y trabajadores bien remunerados que optan por solucionar privadamente el problema de atención para sus familias.

El problema de la salud no es un problema de unas cuantas EPS ineficientes y corruptas, que las hay, sino un problema estructural que únicamente puede encontrar solución en un sistema universal, único y con predominio de lo público, subsidio a la oferta y desaparición completa de intermediarios.

Ivonne

Trascendencia de una tarea

¡Encontrar a Carolina Garzón!

Se superan ya catorce meses de actividad incesante de la familia, el Partido Socialista de los Trabajadores de Colombia y el Movimiento al Socialismo del Ecuador, con el respaldo, participación y apoyo de la Liga Internacional de los Trabajadores, de múltiples organizaciones sindicales y democráticas, de dirigentes políticos de otras organizaciones en el país y el mundo, en la búsqueda de Carolina Garzón, por esclarecer las condiciones y autores de su desaparición.



La campaña de búsqueda de Carolina se mantiene con mitines y movilización.

Algunos compañeros nos preguntan cuál es la trascendencia de la tarea, impactados por la dedicación, esfuerzo y recursos que ven empeñados en la misma. Comprendemos la pregunta en un país como Colombia en el cual la desaparición de decenas de miles, unida al asesinato y a las amenazas, se convirtió en pan de cada día durante los últimos años para las propias familias.

Las más de las veces las familias de los desaparecidos sólo contaron con su propia fuerza y la de algunos amigos para tratar de afrontar las labores de denuncia y búsqueda. Diversas organizaciones de las cuales muchos de los desaparecidos eran miembros activos no asumieron en su momento una actividad mínimamente similar a la que se ha realizado en torno a la búsqueda de Carolina, gracias a la orientación desarrollada por el PST.

Como lo hemos señalado en forma constante y pública, al luchar por Carolina estamos luchando por un derecho democrático que no garantizan plenamente los Estados burgueses ni sus gobiernos ante el flagelo que significa la desaparición forzada de personas por los diversos motivos que la originan (desaparición forzada por razones políticas, trata de personas para explotación sexual, asesinato de personas para venta de órganos, etc.).

Las familias de cualquier desaparecido tienen el derecho de exigir a los Estados implicados el más amplio despliegue y actividad para encontrar al desaparecido y esclarecer las razones y autores de la desaparición. Pero en general esos gobiernos actúan siempre con un criterio de clase, distinguiendo y destinando recursos según que el desaparecido pertenezca socialmente a los poderosos o no. Por eso esta lucha, democrática, tiene una enorme trascendencia en el mundo actual.

Pero hay otro elemento decisivo que hace trascendental esta lucha para las organizaciones agrupadas en la Liga Internacional de los Trabajadores. Cada uno de los miembros de un partido de la LIT es a la vez un miembro de cualquiera de los otros partidos. Ante un hecho como este nuestra moral, distinta de la moral burguesa individualista, nos lleva a actuar como desearíamos que se actuase si uno mismo fuese el afectado. Y, políticamente, somos una familia que trasciende el campo del parentesco biológico para estar unida por un lazo que llega incluso a ser más fuerte que el biológico: estar decididos a la lucha más constante y permanente por derrotar la explotación y opresión del hombre por el hombre, construyendo gobiernos de los trabajadores e iniciando la construcción una sociedad completamente diferente de la actual, la sociedad socialista.

Lo anterior hace que la defensa y salvaguarda de la vida de cada uno de los miembros de nuestra organización sea un valor supremo al cual nunca renunciaremos. Por ello, en la lucha por encontrar a Carolina y esclarecer las causas y autores de su desaparición, continuaremos comprometidos, dure lo que dure, cueste lo que cueste.

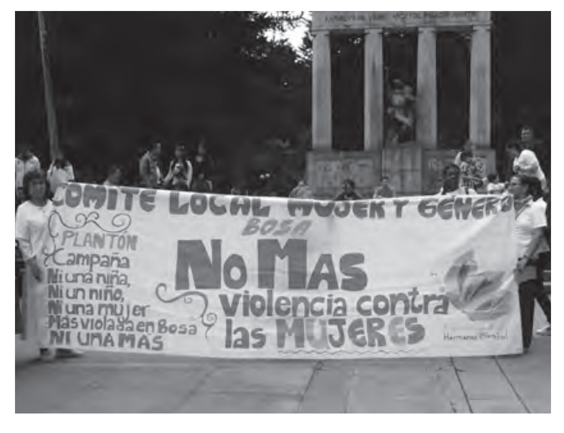
OMS: La violencia de género es una epidemia

Recientemente la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó los resultados de una investigación realizada desde 2010 en 85 países sobre la violencia a la que son sometidas las mujeres, por parte de sus parejas o por hombres con los que no comparten su vida, al extremo de calificar el hecho como una epidemia: "Nos encontramos ante una situación alarmante donde el 35 por ciento de las mujeres a nivel global han sufrido de una u otra de estas dos formas de violencia", declaró Claudia García Moreno, directora del departamento de Salud Sexual y Género de la OMS.

El informe revela que, globalmente, el 38 por ciento de todas las mujeres asesinadas lo fueron a manos de sus parejas, y el 42 por ciento que padecieron violencia física o sexual de su pareja sufrieron graves consecuencias médicas posteriores.

Por regiones, la prevalencia de maltrato de mujeres se sitúa en un 45,6 % en África; un 40,2 % en el Sudeste Asiático; un 36,4 % en el Mediterráneo Oriental (aunque no hay datos sobre violencia que no fue ejercida por la pareja); un 36,1 % en las Américas; un 32,7 % en los países de altos ingresos; un 27,9 % en el Pacífico Occidental; y un 27,2 % en Europa del Este.

Los resultados de este estudio no deben extrañarnos. El machismo como ideología (la supuesta superioridad de los hombres respecto de la mujer)



es funcional al capitalismo, que condena a más de la mitad de la humanidad a la opresión de género y la sobreexplotación económica. A medida que se ha profundizado la crisis económica la violencia contra la mujer se manifiesta cada vez de manera más bárbara y aberrante, ensañándose en las mujeres más pobres o jóvenes.

Es contra esta tendencia, inherente a esta sociedad capitalista en descomposición, que tenemos que actuar los revolucionarios, luchando contra el machismo en nuestras organizaciones sociales y políticas. Es una tarea en la que la Liga Internacional de los Trabajadores está comprometida, tratando de ser un punto de referencia para las oprimidas del mundo.

Declaración de la LIT-CI

¡Cayó Morsi! ¡Gran victoria de la movilización del pueblo egipcio!

El pueblo egipcio, protagonizando movilización colosal, escribe una nueva página en la historia de su país y de su revolución.

Escrito por Secretariado Internacional LIT-CI

La fuerza irresistible de alrededor de 17 millones de personas en las calles es el hecho determinante en el derrocamiento del gobierno de Mohamed Morsi.

Esta movilización, probablemente la más grande en la historia de la humanidad, fue un terremoto político que sacudió los cimientos del régimen militar que impera en el país y que sobrevivió al derrocamiento del dictador Mubarak en febrero de 2011.

La experiencia de las masas egipcias, que comprobaron su fuerza en la caída de Mubarak, hizo una acelerada experiencia con Morsi, quien llegó a la presidencia del país sobre la base de un pacto entre la Hermandad Musulmana y la alta cúpula de las Fuerzas Armadas para preservar el régimen militar.

Un año de mandato fue suficiente para que Morsi, que no respondió a ninguna de las aspiraciones populares tras la caída de Mubarak, se transformase en un cadáver político. El pueblo, hastiado, se levantó con mucha más fuerza que hace dos años y lo derrocó.

Estamos delante de una inmensa victoria de las masas, que la entienden y festejan como tal en las calles y plazas de todo el país.

Es una victoria porque el elemento determinante que derroca a Morsi fue la colosal movilización de las masas. Con este hecho, el régimen militar, aunque no es destruido, sale claramente debilitado, en la medida en que los militares se vieron obligados a sacrificar otro gobierno servil a sus intereses, primero el de Mubarak y ahora el de Morsi. Tuvieron que hacer eso no por libre opción, sino para intentar aplacar una movilización popular a nivel nacional, superior a la que echó a Mubarak, y así salvar su régimen.

Este el contenido esencial del hecho y del proceso. Por eso, no podemos engañarnos ante la forma en que se dio la deposición final de Morsi: una intervención directa o golpe político del Ejército.

Debieron cambiar otro fusible y la situación del régimen, con cada golpe del movimiento de masas, es más precaria, por más que aún consigan maniobrar. Primero Mubarak, ahora Morsi, que además era representante de la Hermandad Musulmana, una organización que mantiene un peso importante en el país ¿Cuántos fusibles le quedan a los generales egipcios y al imperialismo?



La movilización de masas obligó al ejército a derrocar a Morsi.

Según lo anunciado por el comandante en jefe del Ejército y ex ministro de Defensa de Morsi, general Abdel Fatah al Sisi, el actual jefe de la Corte Suprema Constitucional, Adly Masour, asumirá como nuevo presidente. Este personaje deberá conducir un "periodo transitorio" hacia la realización de nuevas elecciones presidenciales y parlamentarias. Una "hoja de ruta" bien conocida por el pueblo egipcio y que puede tener patas cortas.

Esta victoria es parcial y tiene como principal contradicción el hecho de que las masas egipcias continúan confiando en las Fuerzas Armadas. Es decir, no identifican a los generales como los enemigos principales. Para las masas, el enemigo más claro e inmediato continúan siendo los gobiernos (Mubarak, Morsi) y no el Ejército como institución, que además supo reubicarse y romper cualquier lazo que los hundiera junto al desprestigiado Morsi.

El nuevo gobierno surgido como respuesta, por dentro del régimen, a la lucha popular de las masas, no podrá responder a las legítimas demandas y aspiraciones democráticas y económicas del pueblo egipcio. Es un gobierno que responde y responderá, como lo hicieron Mubarak y Morsi, al mismo régimen de los generales pagados directamente por el imperialismo. Por ello no podemos depositar en él ninguna confianza y sólo merece la oposición directa del pueblo y el movimiento obrero, juvenil y popular de Egipto.

La gran tarea de los revolucionarios en este momento consiste en explicar pacientemente a las masas egipcias que este no es su gobierno, que será parte del mismo régimen actual y que debemos permanecer movilizados contra sus planes.

¡La lucha debe seguir!

El nuevo gobierno será, además, mucho más débil que el anterior, lo cual crea mejores condiciones para continuar la lucha no solamente contra él sino contra el régimen de conjunto.

La tarea en este momento es, apoyados en la gran conquista que significa echar a Morsi, mantener la movilización para conquistar plenas libertades democráticas, castigar los crímenes no solo de Mubarak sino de toda la cúpula castrense, confiscar sus fortunas y propiedades y anular todos los pactos que tienen con el imperialismo.

En este sentido, es momento de exigir ¡Ruptura inmediata del Tratado de Camp David y con toda la subordinación financiera y política del Ejército con el imperialismo e Israel! ¡No al nuevo endeudamiento de 4.800 millones de dólares con los banqueros de Washington! ¡No al pago de la Deuda Externa para que esos recursos sean invertidos en trabajo, salud y educación para el pueblo egipcio!

También debemos luchar por: ¡Aumento general de los salarios! ¡Por un plan económico de emergencia y la reducción inmediata de la jornada de trabajo sin reducción de salario de forma que garantice trabajo para todos! ¡Por la expropiación de las grandes empresas nacionales y multinacionales y del sistema financiero!

En este marco, es necesario mantener la independencia de las organizaciones obreras y populares y, al calor de la lucha, avanzar en la construcción de un partido revolucionario e internacionalista que pueda conducir la movilización hasta la destrucción del régimen militar, en el sentido avanzar hacia la única solución de fondo: un gobierno obrero y popular en Egipto.

¡Viva la revolución egipcia!

Secretariado Internacional LIT-CI
3 de julio de 2013



BRASIL

El proceso de movilizaciones contra el aumento del pasaje de transporte público (trenes, metro y ómnibus) que estalló hace varios días y se extendió por todo el país (San Pablo, Río de Janeiro, muchas capitales y ciudades importantes del interior) acaba de obtener un primer e importante triunfo: los gobiernos estaduales y municipales han dado marcha atrás y anularon los aumentos recientes. Habiendo participado activamente de este proceso de movilización (en el que cientos de miles de personas salieron a las calles), el PSTU y las LIT-CI festejan este primer triunfo con inmensa alegría.



Publicación de la Liga Internacional de los Trabajadores (LIT-CI) Cuarta Internacional

www.litci.org





Primera gran victoria de las movilizaciones

La anulación del aumento del transporte, no ha sido el único triunfo. En un hecho inédito en los últimos años, el Congreso brasileño va a tener sesiones extraordinarias durante el receso invernal para tratar un temario propuesto en un "encendido discurso" por su presidente Renán Calheiros (del PMDB, partido de derecha aliado del PT en el gobierno). Como primer paso de este temario se rechazó, por amplísima mayoría, la PEC 37* propuesta por el propio gobierno, uno de los reclamos más fuertes de las movilizaciones. También va a ser tratado en estas sesiones el pase libre para los estudiantes. Una muestra del miedo que el sistema político burgués brasileño tiene frente a la fuerza de las manifestaciones y la política de dar concesiones para tratar de frenarlo.

Declaración de la LIT-CI.

Las movilizaciones comenzaron y crecieron de modo aparentemente imprevisto en un país que parecía "tranquilo" y, en cierta forma, por fuera del proceso de movilizaciones y luchas mundiales. Lo que hemos visto fue un gran proceso de movilización, hasta ahora esencialmente juvenil y popular. Es una nueva generación que se incorpora a la lucha y comienza a escribir su parte de la historia. Las encuestas indicaban que más de un 75% de los movilizados lo hacían por primera vez. Y el 94% de ellos, no pertenecían a ningún partido político. Ahora las movilizaciones comienzan a extenderse a los barrios más pobres y periféricos de las grandes ciudades.

Evidentemente, algo ha cambiado en Brasil, después de casi dos décadas de "tranquilidad". No sólo por la masividad de las movilizaciones sino porque éstas derrotaron y obligaron a la "sagrada entente" entre los gobiernos, los partidos y la prensa burguesa a retroceder. Cuál es la profundidad de este cambio y cuál será su impacto en el futuro, es algo que se verá más claramente en los próximos meses. Especialmente el interrogante sobre si la clase trabajadora organizada va a entrar o no de lleno en el proceso.

Pero es evidente que nada será igual que antes en el país. Frente a las movilizaciones, el sistema político quedó prácticamente paralizado. El mayor desgaste y costo político fueron sufridos por los gobernadores (como el paulista Geraldo Alckmin del PSDB (oposición de derecha a nivel nacional) y los alcaldes, como Fernando Haddad en la ciudad de San Pablo del PT (Partido de los Trabajadores), que aplicaron el aumento y ordenaron la represión. Pero también hay un desgaste del gobierno federal de la presidente Dilma Rousseff del PT (silbada al inaugurar la Copa de las Confederaciones) que, hasta ahora, al igual que su antecesor Lula, parecía "blindada" frente a los efectos de la crisis económica, la inflación o los permanentes escándalos de corrupción. Ese "blindaje" hoy presenta sus primeros "agujeros". Comienzan también a aparecer claros síntomas de división en la burguesía sobre cómo enfrentar el ascenso, aunque todos los sectores burgueses, como hemos visto, parten de aceptar dar concesiones en lo inmediato.

De la criminalización de la protesta al retroceso y los llamados a "la paz"

Inicialmente, los diferentes gobiernos y la prensa burguesa tuvieron la política de atacar el movimiento para justificar una durísima represión policial. Llamaron "vándalos" a los manifestantes y pedían "mano dura", como la poderosa *Red Globo* o el *Jornal do Estado de Sao Paulo* (publicó un editorial titulado "¡Llegó la hora de decir basta!" a las manifestaciones).

Sin embargo el movimiento se mantenía y se extendía, y era evidente que contaba con el apoyo de la mayoría de la población. Cada vez más gente se movilizaba y decidía enfrentar la represión. La transmisión en vivo de las movilizaciones, y la evidencia de que eran las policías militares (dependientes de los gobiernos estaduales) las que provocaban la violencia, (incluyendo ataques a los periodistas), les jugó en contra y aumentó el apoyo popular y la cantidad de manifestantes. El intento represivo fue derrotado políticamente y debieron cambiar su línea.

Hubo incluso periodistas, como José Luiz Datena, conductor de derecha del popular programa "Brasil Urgente" que pasó de lanzar encuestas contra las manifestaciones a apoyarlas públicamente, cuando mostraron el amplio margen de apoyo popular a los reclamos.

Del mismo modo, los gobiernos de los diferentes partidos pasaron de la línea represiva a la confusión, luego al "llamado al diálogo" y, finalmente, a dar marcha atrás con el aumento. El propio gobierno de Dilma cambió desde la declaración de su ministro de Justicia que el gobierno federal haría todos los esfuerzos para que los gobiernos estaduales controlasen las situaciones (léase envío de fuerzas represivas como hizo en Minas Gerais) hasta

Sigue en la pág. 2

La PEC (Propuesta de Enmienda Constitucional) 37 le quitaba al llamado Ministerio Público (una especie de fiscalía oficial independiente) la capacidad de investigar los casos de corrupción y pasaba esta facultad a las policías militar y civil. Era considerado un intento de amortiguar estas investigaciones.

Viene de la pág. 1

decir que "apoyaba las movilizaciones democráticas y escuchaba sus reclamos" (sic).

Se viaja caro y mal

El detonante de todo el proceso fue el aumento de la tarifa de transporte público en todo el país. En sí mismo, fue pequeño (20 centavos de real o 9 centavos de dólar). Pero fue la gota que rebasó el vaso.

El transporte público en Brasil es uno de los más caros del mundo. En San Pablo, sin el último aumento, el precio de un viaje de ómnibus o metro es 1,40 dólar (un viaje combinado sale en 2,11). Esto da un gasto total mensual de cerca de 100 dólares (más del 40% de un salario mínimo y entre un 15 o 20% de los ingresos de quienes cobran entre dos y tres veces ese salario. como la mayoría de los trabajadores del país). Claro, si no hay otra persona que también deba hacer ese gasto. Por otro lado, el precio del pasaje ha venido aumentando muy por arriba de la inflación. Por eso, según el Instituto de Investigación Económica Aplicada, hay 37 millones de personas que no tienen dinero para pagar un pasaje de transporte público y son obligadas recorrer largas distancia a pie o en bicicleta.

Al mismo tiempo, cada vez se viaja peor porque la urbanización y el crecimiento de las grandes ciudades no fueron acompañados de igual inversión en el transporte que diese solución a esa demanda. El transporte público se une a la precariedad y el encarecimiento común de los demás servicios públicos. Trenes y ómnibus superpoblados, atrasos y accidentes frecuentes forman parte de una dura rutina que se repite dos veces al día. Está también la extrema lentitud del tráfico en ciudades cada vez más llenas de autos como resultado del impulso a la producción de automóviles, en detrimento del desarrollo del transporte ferroviario y el metro (más baratos y eficientes).

La "tarifa cero" es posible

En San Pablo, el metro y los ferrocarriles suburbanos pertenecen al Estado. Los ómnibus están concesionados a empresas privadas y representan una gran fuente de ganancias, muy codiciadas por sectores mancomunados con el poder público.

Este negocio lucrativo cuenta, por un lado, un importante ingreso diario de dinero en efectivo. Los ómnibus transportan un promedio de 42 millones de pasajeros y tienen una recaudación de 180 millones de dólares mensuales (datos de abril del 2013) en pasajes. Además, el municipio va a aportar, en 2013, subsidios por casi 600 millones de dólares anuales. Por fuera de este subsidio directo, las empresas cuentan, también, con beneficios anunciados recientemente por el gobierno federal, como exenciones impositivas y de contribuciones sociales.

El alcalde Haddad estimó que la gratuidad del transporte público en la ciudad (la "tarifa cero") requeriría algo más de 2.700 millones de dólares anuales para financiarse. Cifra que, según los voceros del Movimiento Pase Libre (MPL), coincide con el aumento de la recaudación estimado por la municipalidad para este año.

En 1990, un proyecto del propio PT, presentado por la entonces alcalde Luiza Erundina, establecía la "tarifa cero". La propuesta proponía simplemente cubrir el costo del transporte a través del aumento progresivo de los impuestos: los más ricos pagarían por la prestación de ese servicio. El proyecto fue archivado en la Cámara Municipal y el PT nunca más habló de eso.

Lejos de ser una utopía, la "tarifa cero" es plenamente posible si el transporte fuese tratado como lo que es: un derecho del pueblo (y una obligación del Estado) que no puede estar en manos de unos pocos empresarios. En este sentido, el PSTU defiende la estatización del transporte público y la gratuidad de los pasajes una propuesta que significaría una gran mejora en el nivel de vida de millones de personas.

"No es sólo por 20 centavos"

El reclamo principal fue la anulación de los aumentos de los pasajes, pero las movilizaciones reflejaron un proceso mucho más profundo: *"No es sólo por 20 centavos"* decían muchos carteles. Explotó una gran caldera de insatisfacción popular contra la pésima situación de la salud y la educación públicas, o el repudio a la profunda corrupción del sistema político y sus representantes.

También se repudiaron los grandes gastos en estadios y para la organización de la Copa Mundial de 2014, que el gobierno del PT y los demás partidos pensaban capitalizar políticamente presentando un "Brasil del primer mundo", en medio de un festín de corrupción y ganancias de los empresarios amigos del gobierno (como Eike Batista) y hasta la "privatización" de la administración de esos estadios construidos con dinero público. Una fastuosidad que chocó contra la realidad de la vida cotidiana de la mayoría de los brasileños. En un país que ama el fútbol, el Mundial fue repudiado, dentro y fuera de los estadios durante la Copa de las Confederaciones (un ensayo del próximo Mundial) que el humor popular ya rebautizó como "Copa de las Movilizaciones".

Los cuestionamientos de las banderas y los ataques de las bandas de derecha

Durante las movilizaciones se expresó un fuerte cuestionamiento de todo un sector a la participación de los partidos de izquierda y otras organizaciones, como los sindicatos, y a la presencia de sus banderas.

Por la importancia del tema, es necesario detenerse en él. El "apartidismo" de muchos de los participantes expresa un aspecto muy positivo: la ruptura con los viejos partidos del sistema (los burgueses y los reformistas) responsables por la situación actual. Dentro de esa ruptura, hay un elemento de confusión al identificar al PT en el gobierno con las "banderas rojas" y el conjunto de izquierda, sin distinguir quienes luchan contra el gobierno y quienes son parte de él.

Montándose sobre este sentimiento, en las marchas del jueves 20 de junio, grupos organizados de bandas neonazistas atacaron las columnas de



Protesta en la que se

la izquierda, en especial las del PSTU, en varias ciudades, con choques que produjeron varios heridos. Estas agresiones no tuvieron nada de espontáneo: fueron impulsadas por personajes como el militar retirado y diputado de extrema derecha Jair Bolsonaro y diversos medios y sites que llamaban a "defender el carácter no partidario" de las movilizaciones (y a expulsar a las organizaciones de izquierda), y que la bandera de Brasil fuese "la única presente".

Los neonazistas (y lo sectores burgueses que los impulsan) intentaron apoyarse en ese sentimiento "antipartidario" para realizar agresiones claramente organizadas y destinadas a dividir la lucha y a intentar evitar que el PSTU (el partido a la izquierda del PT mejor ubicado en ese sentido) disputase la dirección de este movimiento y del ascenso que está comenzando, y así diera una respuesta "por la positiva" a la crisis de los grandes partidos del sistema. Esto es así porque muchas de los reclamos levantados por la movilización son parte del programa que levanta hace años este partido como el 10% del PBI para la educación o la gratuidad del transporte. Como ejemplo, baste señalar que pocos días antes, el programa de TV gratuito del partido realizó la denuncia de que *"hay dinero para la copa y no para salud y educación"*, que fue una de los reclamos centrales de todo el movimiento.

Volviendo a este intento de la extrema derecha, para derrotar a los neonazistas es necesario responder con la mayor unidad en los medios y en la calle, no sólo de las organizaciones de izquierda sino también de todos los luchadores honestos del proceso, aunque sean "apartidarios". En ese sentido, las declaraciones de varios voceros del MPL (Movimiento Pase Libre) reivindicando la participación de las organizaciones de izquierda y del PSTU en especial son muy positivas.

Derecho y obligación de estar presentes

Pero además de eso es necesario avanzar en el diálogo con aquellos que no están de acuerdo con estas agresiones pero sí consideran que las banderas de la izquierda (y las organizaciones de izquierda



intentó quemar la cancillería de Brasil, como expresión de la lucha contra la corrupción.

en general) perjudican o son nocivas para el tipo de proceso que ellos consideran ideal. Entendemos y compartimos su repudio a los partidos del sistema. Entendemos también su repudio al PT y su rol como principal partido del sistema en esta última década. Pero es necesario diferenciar las "falsas" banderas rojas de las verdaderas, aquellas de los que luchan codo a codo en las movilizaciones.

En primer lugar, la presencia de las banderas del PSTU en estas movilizaciones no tiene nada de "oportunista". Ellas han estado en todas las luchas progresivas en el país en las últimas décadas, sea contra la dictadura o contra los gobiernos electos. El PSTU nunca participó de esos gobiernos que implementan los planes de la burguesía, es oposición clara y firme a ellos aunque se digan de 'izquierda'. Además, los reclamos generales de estas marchas coinciden con propuestas programáticas lanzadas antes de que estas movilizaciones se produjeran, como la rebaja de las tarifas del transporte, el 10% del PIB para educación o la denuncia del carácter de la Copa del Mundo. Desde este punto de vista, esas banderas tienen, a la vez, el derecho y la obligación de estar. Y así lo estuvieron desde el inicio de las manifestaciones, incluso antes de que se masificaran.

En segundo lugar, al decir "no a los partidos" se mezcla todo: a aquellos partidos contra los cuales se está luchando porque son los que gobiernan (como el PT o el PSDB) con aquellos que apoyan e impulsan estas luchas. Tanto los participantes de las marchas como el pueblo en general deben saber qué partidos están de un lado y cuáles del otro de esta lucha.

En tercer lugar, la propuesta de "no a los partidos" es antidemocrática: todo el mundo debe tener el derecho de decidir cómo participa de las marchas: si de modo individual, como parte de un colectivo no partidario o integrando un partido, etc. Nadie puede obligar a otro a adherir a un partido o participar de su columna. Pero, a la vez, no se puede negar el derecho de organizarse en partido u obligar a dejar de hacerlo.

Finalmente, digamos que es divisionista y va contra el crecimiento del propio proceso de movilización. Algo que quedó claro cuando los neonazistas (disfrazados detrás del mote de "nacionalistas" y camuflados con banderas brasileñas) atacaron al PSTU, gritando precisamente "no a los partidos". Una muestra de que esta ideología apartidaría sirve, en última instancia, a la burguesía y al sistema.

Evidentemente, este debate no va a resolverse rápidamente: sus diversas posiciones responden a experiencias profundas y distintas. Lo que les proponemos a todos los activistas apartidarios honestos es abrir un diálogo y un debate sobre las mejores formas de organización de las luchas, con la certeza de que estamos juntos luchando en el mismo campo contra las injusticias del capitalismo y contra los gobiernos que mantienen esas injusticias.

Cómo seguir la lucha

Tal como dijimos, el programa que comenzó a esbozarse en este proceso de lucha es mucho más amplio que la mera anulación del aumento de los 20 centavos. ¿Cómo dar respuesta a la precaria situación de la salud y la educación públicas? ¿Cómo resolver el problema de la inflación y la carestía de los alimentos? ¿Cómo luchar contra las privatizaciones (como la de los aeropuertos o los estadios de fútbol) que sólo van a agravar este cuadro en beneficio de los mismos empresarios y banquero siempre privilegiados? ¿Cómo enfrentar la criminalización de las luchas y los movimientos sociales o contra las agresiones de la extrema derecha?

Para ello, es necesario, en primer lugar, formular un programa común de reivindicaciones e impulsar el ingreso masivo de la clase trabajadora, con sus métodos de lucha y de organización. Por eso, entre esas reivindicaciones, es imprescindible incorporar las más sentidas por los trabajadores y los sectores populares empobrecidos, para que el movimiento ensanche sus bases y fortalezca su capacidad de lucha.

Como señaló Zé María de Almeida, presidente del PSTU, en un reciente artículo:

Es preciso que todas las organizaciones de la clase trabajadora asuman este desafío y esta tarea. La CSP-Conlutas está participando del proceso y está buscando movilizar sus bases en este sentido. Las grandes centrales sindicales deberían, en realidad, convocar una huelga general en este momento. La necesidad ahora es que todos estén en la lucha. Ninguna organización de la clase trabajadora puede proponer menos que esto.

En este sentido, la CSP-Conlutas ha lanzado la propuesta de realizar una jornada nacional de lucha unitaria para próximo jueves 27 de junio. También es importante el acuerdo de la CSP-Conlutas con la Força Sindical y otras centrales para convocar un día de paralizaciones el próximo 11 de julio.

Al mismo tiempo que se impulsa y se participa de la lucha concreta que, como vimos, puede lograr triunfos, es necesario decir que todas esas injusticias y males que afectan al pueblo brasileño son el resultado de un país expoliado semicolonialmente por el imperialismo, asociado a los grandes empresarios nacionales y defendidos por todos los gobiernos del sistema (sean de derecha o de falsa "izquierda"). Por eso, la solución de raíz de esos problemas requiere de una revolución socialista que cambie, precisamente de raíz esa estructura semicolonial. En ese proceso, es clave la construcción de herramientas de organización de la lucha de los trabajadores y las masas. También la de un partido revolucionario que se proponga ser la dirección consciente y consecuente del proceso, y del cual el PSTU es su proyecto más avanzado.

Como dijimos, las cosas han cambiado en Brasil. Ahora la tarea central es preparar las respuestas obreras y socialistas, las organizaciones de masas, y el partido para luchar por esa revolución. Para hacer realidad la consigna que canta el PSTU en sus movilizaciones: *"Ni derecha ni PT, yo quiero ver a los obreros en el poder"*.

La LIT-CI, por su parte, se compromete a impulsar con toda la solidaridad internacional y por eso, sus organizaciones en otros países participan e impulsan activamente de todas las movilizaciones solidarias que ya se han hecho y que se continúan realizando. ¡Viva la lucha del pueblo brasileño!

SI de la LITCI
San Pablo, 25 de junio de 2013

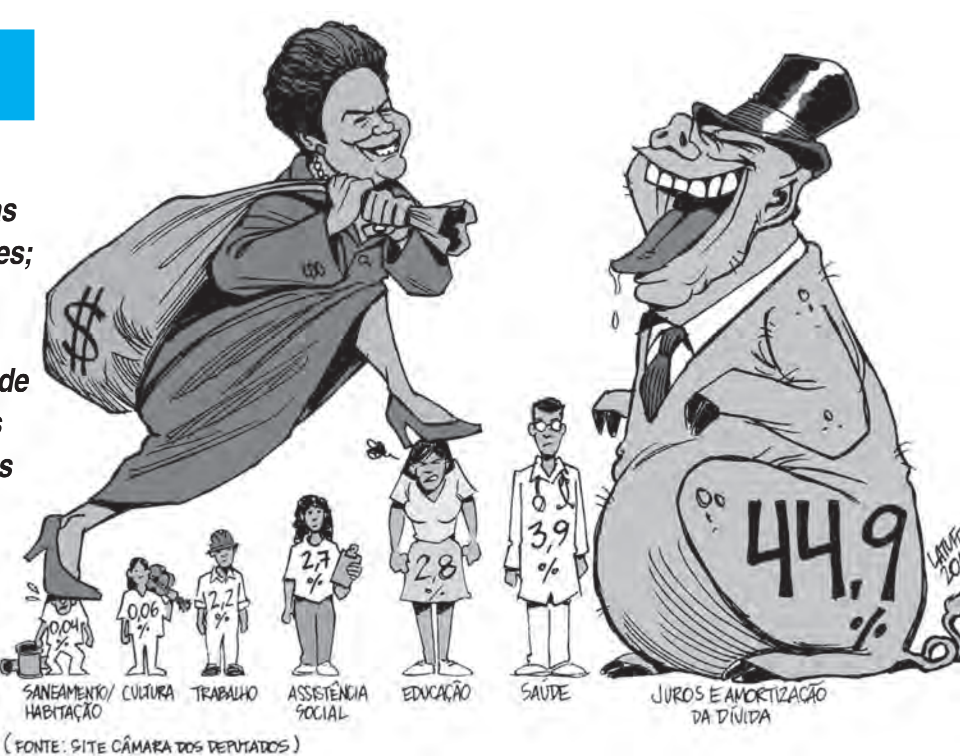


Las protestas en Brasil, del mes de junio, estuvieronw precedidas por otras de los trabajadores organizados en la Central Sindical y Popular-Conlutas, realizadas en abril y mayo de 2013. En la foto una marcha del 23 de abril, en Brasilia, por reivindicaciones como más presupuesto para la educación.

La crisis política de Venezuela, iniciada en el gobierno de Chávez, y hoy profundizada con Maduro; las marchas y huelgas de los trabajadores en Bolivia contra el gobierno de Evo Morales; las huelgas y movilizaciones cotidianas en Argentina contra el gobierno de Cristina Kirchner, y ahora las multitudinarias movilizaciones en Brasil contra el Partido de los Trabajadores de Lula y el gobierno de Dilma Rouseff, indican que los gobiernos llamados alternativos no llenaron las expectativas de las masas trabajadoras y populares, y que no eran alternativos a los gobiernos tradicionales de los capitalistas.



Los gobiernos alternativos, que no lo fueron



El gobierno de Dilma, al igual que el de Lula, han gastado más en pago de intereses y amortización para la fraudulenta deuda externa, que en inversión social.

Esos gobiernos continuaron aplicando los planes neoliberales de sus predecesores, como las privatizaciones y las contrarreformas laborales y sociales, aunque combinando con asistencialismo y eantregando algunas reivindicaciones exigidas por las masas cuando los eligieron.

Tuvo que pasar más de una década para que las masas descubrieran que esos gobiernos no los representaban. Que eran ajenos a sus intereses y que se habían acomodado e integrado al sistema político de corrupción y explotación, abrazando la política de entrega de los recursos económicos y naturales a las transnacionales y al imperialismo, de varios de los gobiernos derrocados por las masas.

Esos gobiernos no mejoraron la prestación de los servicios públicos, la educación y la salud, por el contrario, los entregaron a los capitalistas para que los explotaran como negocio privado. En esencia, no se diferenciaron con gobiernos tradicionales como los colombianos de Uribe y Santos, o con los que derrumbaron las masas y ellos los reemplazaron, como Carlos Andrés Pérez, Fernando De la Rua, Carlos Mesa y Collor de Melo, siguieron aplicando planes contra los trabajadores y gobernando para los ricos.

Todo pareciera indicar que en América Latina se está abriendo un nuevo ciclo, una nueva situación política de lucha por cambios sociales. Pero a diferencia del proceso que se dio a comienzos de la década pasada, que fue un ascenso sólo en continente latinoamericano, hoy el proceso está empalmando con las luchas de los trabajadores de Europa y la lucha revolucionaria de los pueblos del Norte de África y el Medio Oriente.

Las tarifas cero

Las masas brasileñas han logrado un primer triunfo al obligar a revocar el aumento de las tarifas de transporte, pero se abre la discusión sobre la tarifa cero. Esto es, sin costo para los usuarios, lo que no significa que sea gratis, porque si el transporte pasa a ser un servicio estatal se financia con los impuestos de la población, a cambio de que ese dinero se lo apoderen los políticos y gobiernos mediante la corrupción, también eliminando los subsidios que reciben los empresarios y aumentándoles los impuestos.

Estas movilizaciones también colocan en discusión el carácter del transporte en los grandes centros urbanos de América Latina. La dictadura de las ensambladoras del automóvil imponen un transporte de carácter individual que sólo puede ser garantizado por no más del 30% de la población más acomodada, la clase media, copando las vías y formando bloqueos que obligan a los trabajadores a gastar dos y tres horas diarias para el desplazamiento a los lugares de trabajo en condiciones degradantes, completamente apretujados y con largas esperas debido las largas frecuencias que impone la ganancia. Junto con la estatización se debe dar prioridad al transporte colectivo, de carácter masivo como los trenes, para que se pueda prestar un servicio digno, de calidad y sin costo para los usuarios.

La izquierda reformista no sabe cómo salir del embrollo

Las organizaciones de la izquierda reformista que apoyaron y sostuvieron a los llamados gobiernos alternativos hoy no saben cómo justificar y explicar las luchas que libran los trabajadores bolivianos, organizados en la Central Obrera Boliviana (COB), contra el gobierno de Evo Morales; ni el descontento de la población venezolana que termina siendo canalizado, electoralmente, por la derecha que con nostalgia revindica la democracia del derrocado neoliberal Carlos Andrés Pérez; tampoco el desprestigio del gobierno de Cristina Kichner, y menos las movilizaciones presentes en Brasil contra el partido de Lula que para esa izquierda fue un modelo de gobierno para América Latina, aunque gobernaran para los ricos.

Frente a las luchas revolucionarias de las masas en el Norte de África y Medio Oriente, la izquierda reformista, que ha apoyado a los llamados gobiernos alternativos de América Latina, terminó atrapada en una contradicción: aplaudió las movilizaciones que derrocaron los dictadores Ben Ali en Túnez y Hosni Mubarack en Egipto, pero terminaron justificando la represión y el genocidio, contra las masas, ejercida por los dictadores Gadafi en Libia y Al Assad en Siria, pese a que esas luchas de conjunto han hecho parte del mismo proceso. La razón es que sus gobiernos "alternativos" tenían alianzas económicas y políticas con esos dictadores, y por la misma razón han terminado apoyando a la burocracia cubana de los Castro y sus medidas de restauración del capitalismo.

Esa izquierda ha argumentado que las revoluciones en Libia y Siria han sido obra del imperialismo. Pero si la misma presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, se ha visto obligada a reconocer la justeza de esas movilizaciones, así como el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, los argumentos de la izquierda reformista terminan desmoronándose. Esta izquierda cada vez tendrá más dificultad para salir del embrollo en que ha quedado sometida por la lucha de clases.

Alejandro Pereira

La expresión de los gobiernos alternativos en Colombia

En Colombia el proceso de gobiernos alternativos no tuvo una expresión nacional sino local. El Polo Democrático Alternativo (PDA), unidad de la mayoría de la izquierda con sectores del Partido Liberal, eligió dos alcaldes en Bogotá: Luis Eduardo Garzón y Samuel Moreno. Esos gobiernos no marcaron diferencia alguna con los gobiernos de los partidos tradicionales. Mediante alianzas con los partidos burgueses se repartieron buena parte del presupuesto distrital gastándose el dinero destinado a obras públicas, para llenar sus arcas personales, mediante la corrupción. El Polo también ha colocado una buena cuota de corruptos, unos han ido a la cárcel y otros están siendo investigados. Todo parece indicar que la ilusión con los gobiernos "alternativos" se está acabando, y la izquierda reformista no acierta en explicar porque las masas los están combatiendo.